



Consejo de Seguridad

Distr. general
12 de mayo de 2023
Español
Original: inglés

La protección de los civiles en los conflictos armados

Informe del Secretario General

I. Introducción

1. El presente informe se ha preparado en cumplimiento de la solicitud que figura en la declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad de 21 de septiembre de 2018 (S/PRST/2018/18), así como en respuesta a las solicitudes de información sobre temas específicos que formuló el Consejo en sus resoluciones [2286 \(2016\)](#), [2417 \(2018\)](#), [2474 \(2019\)](#), [2475 \(2019\)](#) y [2573 \(2021\)](#).

2. Hay más de 100 conflictos armados en curso en todo el mundo, y los conflictos tienen una duración media de más de 30 años, de manera que los civiles han seguido soportando penurias profundas y duraderas¹. En 2022, como en años anteriores, los conflictos armados dieron lugar a muertes, lesiones, desapariciones forzadas, torturas, violaciones y otras formas de sufrimiento y pérdidas. La destrucción de infraestructura crítica tuvo consecuencias de gran alcance, como interrupciones en el suministro eléctrico, la atención médica y los servicios de agua y saneamiento, y privó a muchas personas de elementos indispensables para su supervivencia. El personal y los establecimientos de salud fueron blanco de ataques, con lo que miles de personas se vieron privadas de atención. El uso de armas explosivas en zonas pobladas ocasionó efectos devastadores mucho más allá de los objetivos previstos. El encarecimiento de los alimentos, el combustible y los fertilizantes, sumado a los efectos del cambio climático, agravó aún más las necesidades de los civiles. El número de desplazados forzosos alcanzó nuevos máximos. En sus esfuerzos por aliviar el sufrimiento, las organizaciones humanitarias se toparon con diversos obstáculos, en particular la violencia, las trabas burocráticas y la escasez de suministros vitales como alimentos y medicinas. En la sección II del presente informe se evalúa el estado de la protección de los civiles en 2022.

3. Cuatro años después de que el Consejo de Seguridad aprobara la resolución [2417 \(2018\)](#), los conflictos armados siguieron constituyendo una de las causas principales del hambre. Se robó equipo agrícola valioso, las tierras agrícolas se plagaron de municiones explosivas, y el ganado y los cultivos fueron arrasados. Los conflictos también generaron trastornos en la agricultura y el comercio y provocaron una escasez de suministros básicos y productos agrícolas. Todo ello, sumado a otros

¹ Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), “Agravamiento de las necesidades humanitarias en muchas zonas de conflicto ante un mundo que aparta la mirada”, 29 de noviembre de 2022; y CICR, “Protracted conflict and humanitarian action: some recent ICRC experiences”, 2016.



factores como el conflicto armado en Ucrania, hizo que subieran los precios de los alimentos y se redujera el acceso a suministros necesarios para su preparación y distribución. Además, la destrucción de infraestructura vital, la escasez de electricidad y combustible y los fenómenos meteorológicos extremos contribuyeron a la escasez de agua. En la sección III del presente informe se examinan las repercusiones de los conflictos armados en la disponibilidad de alimentos y agua.

II. Estado global de la protección de los civiles en los conflictos armados

A. Daño generalizado a los civiles

4. A lo largo de 2022, los conflictos armados provocaron un enorme número de víctimas, erosionaron la resiliencia y pusieron a prueba lo que quedaba de las infraestructuras y servicios esenciales. En muchos de esos conflictos se denunciaron muertes y lesiones de civiles, que también fueron objeto de desapariciones forzadas, torturas, violaciones y malos tratos.

5. En 2022, las Naciones Unidas registraron como mínimo 16.988 muertes de civiles en 12 conflictos armados, un 53 % más que en 2021. En Ucrania, las Naciones Unidas registraron 7.957 civiles muertos y 12.560 heridos, aunque probablemente las cifras reales sean superiores. Las personas mayores se vieron desproporcionadamente afectadas, ya que muchas no quisieron o no pudieron abandonar las zonas de hostilidades y quedaron más expuestas al riesgo de muerte y lesiones y privadas de alimentos, agua, atención médica, alojamiento y redes sociales. En Somalia, 710 civiles murieron y 1.148 resultaron heridos, un 60 % más que en 2021; se trata de la cifra más alta desde 2017. En el Territorio Palestino Ocupado, 2022 fue el año en que se registraron más muertes de civiles palestinos en la Ribera Occidental desde que, en 2005, las Naciones Unidas empezaron a llevar un registro sistemático de las víctimas mortales.

6. En algunos contextos, sin embargo, disminuyó el número de bajas civiles. En la República Árabe Siria, se redujeron en un 38 %. En el Yemen, gracias a una tregua de seis meses, las bajas civiles disminuyeron un 60 %.

7. Cuando se utilizaron en zonas pobladas, las armas explosivas siguieron causando estragos mucho más allá de sus objetivos y mucho tiempo después de su uso, y sus efectos se hicieron notar posteriormente en los servicios esenciales. En 2022 se registraron 2.399 incidentes en que se utilizaron armas explosivas en zonas pobladas de 17 países y territorios afectados por conflictos, que causaron 18.163 víctimas, de las cuales casi el 94 % eran civiles. El mayor número de víctimas civiles de armas explosivas en zonas pobladas se registró en Ucrania, seguida del Afganistán, Somalia y la República Árabe Siria². En Ucrania, las armas explosivas con efectos de gran alcance causaron el 92,5 % de todas las bajas civiles registradas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la mayoría en zonas pobladas.

8. En Colombia, Mozambique, Myanmar, la República Democrática del Congo, Ucrania y otros lugares, los conflictos también acarrearón un costo en términos de acumulación de destrucción, daños o saqueos de viviendas, comercios, escuelas, campamentos de desplazados internos y lugares de culto. En consonancia con las preocupaciones reflejadas en la resolución 2573 (2021), las infraestructuras

² Cifras de Action on Armed Violence. Todas las cifras de Action on Armed Violence (<https://aoav.org.uk/>) y de Insecurity Insight (<https://insecurityinsight.org/>) se basan en los datos disponibles actualmente.

imprescindibles, en particular para prestar servicios como la energía, la atención sanitaria, el agua y el saneamiento, sufrieron daños, y el acceso a estos servicios se vio interrumpido. En toda Ucrania, los combates, que incluyeron múltiples ataques contra sistemas de abastecimiento de agua y centrales y subestaciones eléctricas, provocaron la interrupción del suministro eléctrico, la calefacción, la atención médica, el abastecimiento de agua potable y el tratamiento de las aguas residuales, así como de las comunicaciones móviles y a través de Internet. Según los informes, más de 700 elementos de infraestructura crítica resultaron dañados, entre ellos gasoductos e instalaciones eléctricas. Las ciberoperaciones también repercutieron en los servicios de electricidad, Internet y transporte. Las hostilidades cerca de las centrales nucleares hicieron resurgir el fantasma aterrador de una catástrofe nuclear. En particular, la central nuclear de Zaporizhzhia sufrió bombardeos y cortes de electricidad reiterados que pusieron en peligro el sistema de refrigeración y la seguridad tecnológica de la central.

9. En la República Árabe Siria, una planta de gas y varias estaciones de transmisión de electricidad fueron atacadas durante las hostilidades, dejando a miles de civiles sin electricidad, calefacción y agua. En general, el acceso a la electricidad generada por el Estado se situó en torno al 15 % de los niveles de 2010, lo que afectó a los establecimientos de salud y los centros educativos, la producción de alimentos, el riego y otros aspectos. En el norte de Etiopía, los daños en infraestructuras críticas y la falta de acceso a la electricidad, las telecomunicaciones y los servicios bancarios en muchas zonas trastornaron en gran medida los medios de subsistencia y servicios básicos como la salud, el agua y la educación.

10. En Myanmar, la República Democrática del Congo y otros lugares también se atacaron los lugares de culto. En Ucrania, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura verificó daños en lugares religiosos, museos, edificios de interés histórico o artístico, monumentos y bibliotecas.

11. En 2022, se denunció el uso de minas antipersonal en Colombia, Myanmar, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Ucrania y el Yemen. También se informó del uso de municiones en racimo en Ucrania. Las minas terrestres, las municiones en racimo y los restos explosivos de guerra supusieron un grave peligro para los civiles, obstaculizaron el acceso a servicios esenciales y medios de subsistencia y paralizaron la recuperación. En total, las minas, los artefactos explosivos improvisados y los restos explosivos de guerra causaron al menos 6.738 bajas civiles en 25 países y territorios. Las cifras más elevadas se observaron en la República Árabe Siria, seguida de Somalia.

12. En la República Árabe Siria, según las estimaciones, aproximadamente 1 de cada 3 comunidades estaba contaminada por municiones explosivas. El Iraq era uno de los países más contaminados por municiones explosivas del mundo, y los restos explosivos de guerra causaron un tercio de las bajas civiles. En el Afganistán aún había 4.295 zonas peligrosas, lo que afectaba al menos a 1.528 comunidades. Meses después del fin de los combates, zonas de Tigré, Amara y Afar, en Etiopía, seguían plagadas de restos explosivos de guerra. Se creía que los 14 estados y regiones de Myanmar estaban contaminados con municiones explosivas, causantes de alrededor del 30 % de las muertes y lesiones relacionadas con el conflicto.

13. Es posible que las heridas psicológicas de los conflictos hayan resultado menos evidentes, pero no han sido menos devastadoras. En los conflictos armados, 1 de cada 5 personas vivía con un trastorno mental y se triplicaban las probabilidades de sufrirlo, pero se reducían las probabilidades de recibir ayuda. Aproximadamente el 40 % de los hogares de Gaza informaron de que al menos un miembro de la familia había mostrado signos de angustia o trauma psicosocial en el año anterior.

Avances positivos y buenas prácticas para proteger a los civiles

14. En noviembre de 2022 se alcanzó un logro histórico: 83 Estados aprobaron e hicieron suya la Declaración Política acerca del Fortalecimiento de la Protección de la Población Civil contra las Consecuencias Humanitarias Derivadas del Uso de Armas Explosivas en Zonas Pobladas. En el documento, los Estados declararon que garantizarían que sus fuerzas armadas adoptaran y aplicaran políticas y prácticas para evitar daños a la población civil, incluso mediante la restricción o abstención del uso de armas explosivas en zonas pobladas, cuando se previera que su uso causaría daños a la población civil o a los bienes de carácter civil, señalando que los riesgos para los civiles aumentaban en función de la potencia explosiva del arma, su nivel de precisión y la cantidad de municiones utilizadas. Los Estados interesados declararon también que garantizarían que sus fuerzas armadas considerasen los efectos directos e indirectos de sus operaciones sobre la población civil y los bienes de carácter civil y proporcionarían asistencia a las víctimas. La aplicación de la Declaración debe representar una ruptura con el enfoque habitual y contribuir a seguir reduciendo los daños a la población civil.

15. Se observaron también algunos avances positivos a escala nacional. En agosto de 2022, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó el Plan de Acción de Mitigación y Respuesta frente a los Daños a Civiles. La puesta en práctica del plan conlleva actualizar la doctrina, las directrices y los procedimientos de los Estados Unidos de América y aumentar las capacidades para mitigar los daños a la población civil y responder a ellos en las operaciones de los Estados Unidos y en las operaciones multinacionales dirigidas por el país y desarrolladas en el marco de alianzas en materia de seguridad.

16. En Ucrania, el Gobierno aprobó un procedimiento para señalar infraestructuras civiles clave, edificios y vehículos, incluidos bienes culturales, unidades y transportes de servicios médicos, elementos utilizados para el suministro de agua, saneamiento, calefacción, gas y electricidad, y alimentos, centrales nucleares y otros elementos que contuvieran fuerzas peligrosas.

17. Mozambique creó la Comisión Interministerial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para determinar a qué tratados debía adherirse y descubrir oportunidades de formación, así como para promover y vigilar los avances en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

B. Sufrimiento agravado

Atención médica

18. Persistió la violencia contra el personal médico y los establecimientos de salud, que causó más muertes y sufrimiento al dejar a miles de personas sin asistencia. Según datos de 17 países y territorios afectados por conflictos en 2022, 174 trabajadores de la salud murieron, 301 resultaron heridos, 220 fueron secuestrados y 55 fueron agredidos. En Ucrania se registró la cifra más alta de muertes de personal del sector. Donde más trabajadores de la salud sufrieron lesiones fue en el Territorio Palestino Ocupado, Ucrania y el Afganistán. El secuestro de personal médico fue más frecuente en la República Democrática del Congo y Nigeria³.

19. En los mismos 17 países y territorios, 627 establecimientos de salud resultaron dañados o destruidos. La Organización Mundial de la Salud también registró incidentes en los que sufrieron daños pacientes, vehículos, establecimientos y suministros. En el Níger se cerraron 94 establecimientos de salud que fueron objeto

³ Cifras de Insecurity Insight.

de ataques. En el Camerún, un ataque contra el hospital de distrito de Mada, que daba servicio a miles de personas de la región, provocó su cierre durante varios meses, lo que obligó a los pacientes con problemas médicos graves a desplazarse cientos de kilómetros y provocó la muerte de mujeres embarazadas que no pudieron recibir asistencia durante el parto. En Somalia, un ataque dañó el principal hospital de Beledweyne, y los combatientes ocuparon otro hospital y ordenaron trasladar a los pacientes para hacer sitio a sus compañeros heridos.

20. En la República Democrática del Congo se perpetraron ataques contra importantes hospitales y centros de salud y se atentó contra el personal médico. Un centro de salud de Kivu del Norte que atendía a más de 21.000 personas fue saqueado e incendiado. Se saquearon suministros y equipo médicos de las farmacias. La violencia generalizada en Ituri hizo que se suspendieran los servicios en cinco centros de salud y un hospital general donde se atendía a unas 120.000 personas. En Colombia se asesinó a pacientes y trabajadores de la salud, se amenazó a estos últimos, se retuvieron ambulancias en los puestos de control y se sacó a pacientes de ellas por la fuerza. La detonación de artefactos explosivos cerca de establecimientos de salud y el confinamiento de las comunidades impidieron que los pacientes recibieran asistencia⁴. En Cabo Delgado (Mozambique), varios establecimientos de salud resultaron destruidos o dañados, y se interrumpieron los servicios. Como resultado, alrededor del 29 % de las mujeres dieron a luz en casa sin asistencia médica porque los establecimientos de salud se encontraban demasiado lejos, resultaban poco seguros o estaban cerrados.

21. En Ucrania, según los informes, entre el 24 de febrero y el 31 de diciembre de 2022 se produjeron 707 ataques contra el sistema de salud, incluidos trabajadores, hospitales, clínicas, farmacias, centros de transfusión de sangre y ambulancias; varios trabajadores de la salud resultaron muertos o heridos, y 218 hospitales y clínicas sufrieron daños o quedaron destruidos. En los hospitales se agotaron suministros médicos indispensables, y hubo que reubicar al personal y los pacientes en refugios improvisados. Los combates impidieron el acceso al tratamiento de enfermedades crónicas e infecciosas. Los servicios de salud también se vieron afectados por el envejecimiento y el mantenimiento inadecuado de los equipos, la escasez y el aumento del costo de los medicamentos, y el desplazamiento del personal de atención de la salud.

22. En muchos otros conflictos, la inseguridad obligó a huir a trabajadores de la salud, exacerbando todavía más la escasez. En el Camerún, parte del personal se marchó a causa de la inseguridad, de modo que aumentó la carga de trabajo del personal restante y se redujeron o interrumpieron los servicios comunitarios. En Ituri (República Democrática del Congo), las amenazas provocaron la marcha del personal de seis centros de salud, lo que a su vez incidió en la atención médica para 300.000 personas. En el sudeste de la República Centroafricana, un tercio de los hogares carecían de acceso a servicios de salud porque el personal había huido.

23. La atención de la salud también siguió en una situación precaria. En el Afganistán, aún no se han reconstruido muchos de los establecimientos de salud que habían sido dañados y destruidos. En la República Árabe Siria, solo estaban en funcionamiento el 53 % de los centros sanitarios. En el Yemen, el acceso a la atención médica continuó viéndose obstaculizado por la escasez de establecimientos funcionales, así como por las largas distancias y la imposibilidad de asumir el costo de los servicios. En todo el país, solo el 51 % de los establecimientos de salud estaban plenamente operativos. En Ucrania, antes del 24 de febrero de 2022 había 20 puntos de prestación de servicios médicos y hospitales de maternidad que proporcionaban

⁴ CICR, “Colombia: retos humanitarios 2023”, 8 de marzo de 2023.

asistencia a supervivientes de la violencia de género; menos de dos meses después, solo quedaban operativos nueve debido a los daños causados por las hostilidades y a la escasez de personal.

24. En el norte de Etiopía, los daños, la destrucción y el saqueo generalizados de establecimientos de salud que habían tenido lugar antes de 2022 siguieron obstaculizando la prestación de asistencia médica. En Tigré, pocos establecimientos de salud funcionaban a pleno rendimiento y se agotaron los suministros, por lo que se redujo el tratamiento de enfermedades no transmisibles, se prestaron pocos servicios de salud maternoinfantil y hubo más complicaciones y muertes. Asimismo, muchos establecimientos de salud de Afar y Amara dejaron de funcionar o lo hicieron parcialmente. En gran parte de Tigré y zonas de Amara y Afar, los servicios sanitarios quedaron aislados de la asistencia humanitaria, de los mecanismos habituales de suministro y mantenimiento y de los mercados comerciales, lo que redujo gravemente la disponibilidad de medicamentos como la insulina, los antibióticos y los líquidos para vía intravenosa, los suministros médicos y el combustible para generadores y ambulancias. Enfermedades como el sarampión, el tétanos y la tosferina estaban aumentando en Tigré tras el descenso de las tasas de vacunación debido a la escasez de suministros, los cortes eléctricos por los que se rompieron las cadenas de frío y la imposibilidad de que los habitantes de las zonas rurales llegaran a los establecimientos de salud. Las interrupciones de los servicios bancarios impidieron pagar a los trabajadores de la salud, las restricciones eléctricas perjudicaron el funcionamiento de los servicios y equipos sanitarios, y los cortes de las comunicaciones dificultaron la derivación de pacientes y otras actividades.

25. Como ejemplo de buenas prácticas, en Malí, la Coordinadora de Movimientos de Azawad firmó la Escritura de Compromiso de Llamamiento de Ginebra para la protección de la atención médica en los conflictos armados, por la que se compromete a respetar y proteger al personal y los establecimientos de salud, los transportes sanitarios y a los heridos y enfermos.

El medio natural y el cambio climático

26. El medio ambiente siguió sufriendo una destrucción y degradación duraderas como consecuencia de los conflictos. En Gaza, la destrucción de infraestructura, entre otros los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado, continuó causando la contaminación del agua y otros peligros ambientales. Ucrania se vio afectada por la presencia de minas terrestres en los bosques y la destrucción de estos, la contaminación del suelo por metales pesados y fugas tóxicas, la contaminación de las aguas subterráneas por combustibles y sustancias químicas tóxicas, ecosistemas degradados y en peligro, y la liberación de contaminantes tóxicos y millones de toneladas de gases de efecto invernadero, en particular a causa de incendios industriales y forestales y quemadas agrícolas, y la quema de petróleo en los depósitos. En la República Democrática del Congo, el conflicto posibilitó la explotación ilegal de recursos naturales como los bosques, la fauna y flora silvestres y los minerales.

27. El cambio climático exacerbó las vulnerabilidades en lugares donde los conflictos armados ya dificultaban el acceso de los civiles a recursos fundamentales. De los 25 países más vulnerables al cambio climático y con menos recursos de adaptación, la mayoría estaban, además, afectados por conflictos armados⁵. Mientras el Sahel sufrió la peor sequía en más de un decenio, Burkina Faso padeció los efectos agravados del cambio climático y el conflicto, entre otros una crisis alimentaria y la situación al límite del sistema de salud. En Somalia, tras decenios de conflicto armado

⁵ “La triple amenaza de cambio climático, conflictos armados y emergencias sanitarias: una combinación mortal para los más vulnerables en contextos inestables”, declaración conjunta de Médicos sin Fronteras y el CICR, 4 de noviembre de 2022.

y un ciclo de sequías e inundaciones, la población apenas tiene oportunidades de adaptarse, y las acuciantes necesidades se han exacerbado. En el Territorio Palestino Ocupado, la interacción entre el conflicto y el cambio climático (que se manifiesta en sequías, inundaciones y la subida del nivel del mar) también ha agravado las dificultades para la población civil. Por ejemplo, las restricciones a la circulación y al acceso a la tierra y otros recursos dificultaron la adaptación de los agricultores a las cambiantes pautas meteorológicas, lo que a su vez generó inseguridad alimentaria. En la República Centroafricana, las inundaciones exacerbaron las vulnerabilidades de las poblaciones afectadas por el conflicto, mientras que los combates impidieron el acceso humanitario.

28. En un paso positivo para encarar preocupaciones de larga data sobre los efectos de los conflictos en el medio ambiente, la Asamblea General, en su resolución [77/104](#), tomó nota de los 27 principios jurídicos elaborados por la Comisión de Derecho Internacional sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados y alentó a que se les diera la máxima difusión posible.

Desplazamiento forzado

29. El número de desplazados forzosos como consecuencia de los conflictos, la violencia, las violaciones y abusos de los derechos humanos y la persecución superó la alarmante cifra de 100 millones⁶; Burkina Faso, Mozambique, Myanmar y Ucrania fueron algunas de las crisis de desplazamiento que se acentuaron con mayor rapidez. Asimismo, dentro y fuera de las fronteras, siguió habiendo desplazamientos relacionados con conflictos en el Camerún, Colombia, Etiopía, Malí, el Níger, Nigeria, la República Árabe Siria, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, el Yemen y otros lugares. Las crisis relacionadas con el clima aceleraron y prolongaron los desplazamientos en muchos lugares.

30. En Ucrania se produjo uno de los desplazamientos más rápidos y de mayor envergadura. A finales de 2022, según las estimaciones, 13,5 millones de personas, alrededor del 33 % de la población, habían huido de sus hogares: 5,6 millones permanecieron en el país, y más de 7,9 millones se desplazaron a otros países de Europa.

31. En la República Árabe Siria, el número total de desplazados internos, 6,8 millones, seguía siendo el más alto del mundo, y el 80 % llevaban desplazados más de cinco años. Aproximadamente 55.000 desplazados sirios, iraquíes y nacionales de terceros países permanecían en campamentos del nordeste del país, donde la violencia, la explotación y los abusos eran generalizados. Cada vez más Estados repatriaron a mujeres y niños, pero la inmensa mayoría permaneció en el país y apenas se observaron indicios de progreso.

32. Pese a su desplazamiento, esas personas siguieron sin estar a salvo. En el Yemen, los desplazados se enfrentaron a condiciones de vida precarias y peligrosas, apenas tuvieron acceso a bienes y servicios esenciales y era muy probable que tuvieran que desplazarse de nuevo debido a fenómenos climáticos como las inundaciones. En el nordeste de Nigeria, el cierre de los campamentos de desplazados internos acarrió desplazamientos secundarios, una nueva exposición a las municiones explosivas y el riesgo de sufrir ataques de actores armados. En la República Democrática del Congo, los desplazados internos y los refugiados hicieron frente a la violencia, los peligros de las minas y los restos explosivos de guerra, y la falta de acceso a los servicios básicos. En la República Centroafricana, los desplazados internos, principalmente en los campamentos, también fueron objeto de violencia, así como de detención y

⁶ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Informe semestral de tendencias 2022”, 27 de octubre de 2022.

privación de libertad arbitrarias y reclutamiento forzado de niños. En Myanmar, Somalia, Sudán del Sur y otros lugares, los desplazados internos estuvieron expuestos a los peligros de las municiones explosivas, que también desalentaron el regreso en Libia, la República Árabe Siria y otros lugares.

33. En Ucrania, los países del Cuerno de África y el Sahel, entre otros lugares, las mujeres y niñas desplazadas por la fuerza siguieron expuestas a un mayor riesgo de violencia de género. En la República Democrática del Congo, más de 1.000 desplazados fallecieron mientras se refugiaban en los campamentos o intentaban regresar a casa.

34. La falta de documentación civil de los desplazados internos planteó varios problemas, por ejemplo a la hora de acceder a la atención médica y la educación, participar en elecciones e incorporarse a programas de restitución o reconstrucción. En el Iraq, el 28 % de los desplazados internos en campamentos, el 25 % de los desplazados internos en entornos urbanos y el 16 % de los desplazados internos retornados carecían de al menos un documento básico.

35. Los retornos forzosos, las reubicaciones y los desalojos de desplazados internos fueron especialmente frecuentes en la República Centroafricana, Somalia y el Yemen. En Mozambique, pese a los desplazamientos en curso, los retornos voluntarios aumentaron de forma considerable, principalmente gracias a la mejora de la seguridad y las condiciones de vida, las reunificaciones familiares y el acceso a viviendas, tierras y otras propiedades, así como a la oportunidad de cultivar y, en ocasiones, recibir ayudas públicas.

36. En junio de 2022, el Secretario General presentó la Agenda de Acción sobre los Desplazamientos Internos. A partir del informe de 2021 del Panel de Alto Nivel sobre los Desplazamientos Internos y de las consultas con Estados Miembros, organizaciones no gubernamentales y comunidades de desplazados internos, en la Agenda de Acción se esbozaron 31 compromisos de las Naciones Unidas, entre ellos colaborar con los Gobiernos, las comunidades y las partes interesadas en el desarrollo para encontrar soluciones duraderas al desplazamiento interno, atacar las causas profundas del desplazamiento, abogar por políticas y medidas que promovieran la protección de los civiles y redujeran los riesgos de desplazamiento, y promover una comprensión holística de las interrelaciones del desplazamiento y los riesgos, entre otras cosas la interrelación de los conflictos y los efectos del cambio climático.

C. Vulnerabilidades específicas

Niños y niñas

37. En el Afganistán, Burkina Faso, el Camerún, Mozambique, la República Árabe Siria, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Somalia, Ucrania, el Yemen, el Territorio Palestino Ocupado y otros lugares, miles de niños murieron o resultaron heridos, entre otras cosas por las minas terrestres, los restos explosivos de guerra, los artefactos explosivos improvisados y el uso de armas explosivas en zonas pobladas. En Burkina Faso, durante los nueve primeros meses de 2022, el número de niños fallecidos se triplicó respecto al mismo período de 2021. En Somalia, los niños representaron el 95 % de las bajas causadas por los restos explosivos de guerra. Entre enero de 2018 y noviembre de 2022, las bajas infantiles por minas terrestres y municiones sin detonar en el Yemen aumentaron de 1 cada 5 días a 1 cada 2 días⁷.

⁷ Save the Children, "Watching our every step: the deadly legacy of explosive ordnance for children in Yemen", 2023.

38. Se registraron secuestros de niños en Burkina Faso, el Camerún, Colombia, el Iraq, Mozambique, Nigeria, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Somalia, la cuenca del lago Chad y otros lugares. Se siguió reclutando a niños en las fuerzas armadas o en grupos armados no estatales y utilizándolos en combates y funciones de apoyo en Myanmar, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Somalia y otros lugares, y las cifras a ese respecto aumentaron en Burkina Faso, Libia, Malí, Nigeria y la República Árabe Siria. En la República Centroafricana se reclutó a niños con fines sexuales y para que combatieran, vigilaran los puestos de control y asumieran otras funciones. En Colombia, para reclutar a los niños se recurrió al secuestro, las amenazas, la explotación sexual y la promesa de compensaciones materiales. En el Yemen, la pobreza, el desempleo y la imposibilidad de acceder a la educación impulsaron el reclutamiento de niños, a menudo la única fuente de ingresos familiares.

39. En el Iraq, Israel, Libia, el Territorio Palestino Ocupado y otros lugares se detuvo a niños por su presunta vinculación con grupos armados no estatales. En la República Árabe Siria, cientos de niños seguían privados de libertad por este motivo, mientras que 35.000 languidecían en condiciones terribles en campamentos del nordeste del país de los que no se les permitía salir. En el Camerún, algunos niños anteriormente vinculados a grupos armados tuvieron dificultades para reintegrarse en las comunidades.

40. En Ucrania se denunciaron deportaciones y traslados forzosos de niños no acompañados, incluso desde orfanatos y hogares de acogida. En el Camerún, la República Centroafricana y otras zonas de conflicto, los niños se enfrentaron a la separación familiar durante los desplazamientos; en Mozambique se registraron 3.935 niños no acompañados y separados.

41. Los conflictos interrumpieron abruptamente la educación de los niños. Persistieron los ataques contra docentes y escuelas en el Afganistán, Myanmar, la República Árabe Siria, la República Democrática del Congo, Somalia, la región central del Sahel y otros lugares. A lo largo de 2022, al menos 118 educadores fueron asesinados, heridos o secuestrados en 13 países y territorios⁸. En Colombia, los ataques a las escuelas y su uso militar, las amenazas a los docentes y la presencia de municiones explosivas cerca de los centros obstaculizaron la educación de los niños. En la República Centroafricana se cerraron el 18 % de las escuelas, debido principalmente al desplazamiento de los docentes.

42. En las regiones etíopes de Tigré, Afar y Amara, las Naciones Unidas documentaron la destrucción de 2.140 escuelas. En la región central del Sahel, se amenazó, secuestró y ejecutó a docentes y se incendiaron y saquearon escuelas. Más de 8.300 centros escolares habían cerrado en Burkina Faso, Malí y el Níger a causa de los ataques o porque los progenitores tenían demasiado miedo para enviar allí a sus hijos o habían huido con ellos. En Burkina Faso, casi el 24 % de las escuelas cerraron por la situación de inseguridad, dejando sin educación a más de 1 millón de niños. En el Níger cerraron 890 escuelas por los ataques y amenazas contra docentes y centros escolares y el desplazamiento de niños; asimismo, hubo escuelas que quedaron destruidas por las inundaciones o se utilizaron como alojamiento alternativo para las víctimas de estas. En el Afganistán, Burkina Faso, el Camerún, Malí, Myanmar, la República Árabe Siria, la República Democrática del Congo, el Yemen y otros lugares, las partes también utilizaron escuelas con fines militares. Las interrupciones de la actividad escolar mermaron las oportunidades futuras de los niños y los expusieron en mayor medida al riesgo de ser reclutados por fuerzas o grupos armados, utilizados en las hostilidades, secuestrados y sometidos a la violencia sexual.

⁸ Cifras de Insecurity Insight.

43. Burkina Faso y Nigeria dieron un paso importante al firmar con las Naciones Unidas sendos protocolos de entrega para prevenir y reducir la detención por parte del Estado de niños presuntamente asociados con grupos armados y garantizar su reintegración en la comunidad.

Violencia sexual

44. Siguieron denunciándose cientos de casos de violencia sexual relacionada con los conflictos ejercida contra mujeres, niñas, hombres y niños en Etiopía, Malí, Mozambique, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Somalia, el Sudán, Ucrania y otros lugares. Como se explica en un informe específico, las mujeres y las niñas representaron al menos el 95 % de las víctimas de los casos de violencia sexual documentados. Un alto porcentaje de los supervivientes eran personas desplazadas.

45. En la República Democrática del Congo se produjeron incidentes mientras las mujeres y las niñas se desplazaban a los campos, recogían leña o desempeñaban actividades de subsistencia, como represalia tras las hostilidades y en otras circunstancias. En la República Centroafricana y el nordeste de Nigeria hubo incidentes cuando la gente huía a través de campos o bosques. En todos los conflictos, el nivel de denuncias de la violencia sexual se mantuvo persistentemente bajo a causa de las barreras que existen desde hace tiempo para denunciarla, el estigma y el miedo a las represalias. Además, se restringió el acceso de los supervivientes a servicios médicos y psicosociales vitales, mientras que el debilitamiento de las instituciones y la falta de confianza de los supervivientes en los procesos judiciales ralentizaron el ritmo de la justicia.

46. Un informe de 2022 sobre las percepciones masculinas de la violencia sexual en Sudán del Sur y la República Centroafricana reveló que las concepciones de género y poder adquiridas en el plano social a una edad temprana estaban en el origen de la violencia sexual. Cabe señalar como nota positiva que los líderes comunitarios varones se mostraron dispuestos a aprender de las estrategias utilizadas en otros lugares para dejar atrás los estereotipos de género y aumentar la rendición de cuentas por el comportamiento individual⁹.

47. En junio de 2022, el comité estratégico nacional de la República Centroafricana sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos aprobó un plan de acción nacional centrado en la documentación de dicha violencia, las iniciativas legislativas y judiciales conexas, la asistencia multisectorial a los supervivientes y la coordinación y el apoyo institucionales con vistas a alcanzar esos objetivos. En diciembre de 2022, la República Democrática del Congo aprobó legislación sobre la protección de las víctimas de la violencia sexual relacionada con los conflictos y las reparaciones correspondientes.

Personas con discapacidad

48. Los conflictos armados resultaron todavía más peligrosos para las personas con discapacidad física e intelectual. En el Camerún, Myanmar, Ucrania y otros lugares, las personas con discapacidad se vieron a menudo atrapadas en las hostilidades al no poder marcharse a causa de su movilidad limitada y de la inaccesibilidad de los medios de transporte, los refugios, los avisos de emergencia o la información sobre evacuaciones y medidas de seguridad.

49. En un informe de 2022 sobre los niños con discapacidad del nordeste y el noroeste de la República Árabe Siria se documentaron las barreras para huir de las

⁹ CICR, “‘My father and cows will go to court, not me’: male perceptions of sexual violence in South Sudan and the Central African Republic”, 2022.

hostilidades y acceder a los servicios de salud y las escuelas. El conflicto también degradó los sistemas de apoyo y redujo aún más la disponibilidad o asequibilidad de la terapia y las ayudas técnicas¹⁰. En seis municipios de los departamentos nigerinos de Tilaberi y Diffa, el 61 % de las personas con discapacidad entrevistadas tenían dificultades para acceder a los servicios de salud, el 43 % tenían dificultades para acceder a las letrinas o carecían de acceso a ellas, y el 54 % tenían dificultades para acceder al agua potable o carecían de acceso a ella¹¹. En Mozambique, el acceso de esas personas a la recogida de agua, el saneamiento, la atención médica y los mercados se vio obstaculizado. En Ucrania, algunas personas con discapacidad no pudieron acceder a ningún tipo de alimentos, servicios médicos, asistencia psicológica o refugios adaptados a sus necesidades. En la República Democrática del Congo, una infraestructura deficiente, la estigmatización social, la falta de información y otras barreras impidieron que esas personas recibieran ayuda humanitaria. En algunas partes del Camerún, en el Yemen y en otros lugares, los niños con discapacidad no pudieron asistir a la escuela.

50. Las personas con discapacidad también hicieron frente a la estigmatización, y las mujeres y las niñas con discapacidad, a un mayor riesgo de violencia sexual. Según un informe de 2022, los civiles con discapacidades físicas y de otro tipo en el Yemen se enfrentaban al estigma social y a daños psicológicos derivados de las consecuencias económicas y sociales de su situación de discapacidad¹². Además, el conflicto siguió obstaculizando el acceso de las personas con discapacidad a los servicios y ayudas.

51. En un sentido positivo, Grecia informó de que en los cursos de la Escuela del Estado Mayor y de Mando de la Fuerza Aérea Helénica se hacía hincapié en la importancia de proporcionar protección y consideración específicas a las personas con discapacidad en el ámbito operacional (véase [A/77/203](#)).

Periodistas

52. En 2022, 25 de los 87 asesinatos de periodistas registrados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ocurrieron en los siguientes Estados y territorios afectados por conflictos armados: Colombia (4), Myanmar (2), República Árabe Siria (2), República Democrática del Congo (1), Somalia (2), Ucrania (10), Yemen (2) y Territorio Palestino Ocupado (2). La mayoría de esos asesinatos parecían guardar relación con las hostilidades.

Personas desaparecidas

53. En 2022, el Comité Internacional de la Cruz Roja registró más de 29.000 nuevos casos de personas desaparecidas y estaba siguiendo más de 190.900, la mayoría relacionados con conflictos armados. Esa cifra era un 60 % más alta que cinco años atrás, y se creía que el número total de personas desaparecidas como consecuencia de conflictos armados era muy superior.

54. En Colombia se había informado de la desaparición de más de 99.000 personas en relación con el conflicto armado. En 2022, la Unidad para las Víctimas del país registró 246 casos de desaparición forzada. Desde el 24 de febrero de 2022, el

¹⁰ Human Rights Watch, *“It Was Really Hard to Protect Myself”: Impact of the Armed Conflict in Syria on Children with Disabilities* (2022).

¹¹ Humanity and Inclusion, “Étude des barrières d'accès des personnes handicapées à l'assistance humanitaire dans les communes de Dessa, Gothèye, Torodi, Diffa, Mainé-Soroa et Gueskéroù (Niger)”, octubre de 2022.

¹² Mwatana for Human Rights, “Civilians with disabilities caused by the armed conflict in Yemen: evaluating the impact of disability and related accessibility problems through documented field cases”, febrero de 2022.

Gobierno de Ucrania ha registrado miles de casos de personas desaparecidas. Se hallaron cadáveres abandonados, mutilados o enterrados en fosas comunes, lo que dificultó su identificación. Al 16 de septiembre de 2022, en Ucrania seguían desaparecidas más de 15.202 personas, entre ellas 4.259 civiles. En marzo de 2022, Ucrania creó la Oficina Nacional de Información para responder de los prisioneros de guerra y los civiles privados de libertad y registrar y localizar a las personas desaparecidas, incluidos sus propios nacionales.

55. En todo el mundo se procuró esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y atender las necesidades de sus familias mediante mecanismos nacionales y coordinados de búsqueda. En la República Árabe Siria, la sociedad civil y las asociaciones de supervivientes y familiares habían recopilado información sobre más de 100.000 personas desaparecidas. Confirmando las dificultades sistemáticas para conocer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas en el país, el Secretario General presentó un marco para mejorar los mecanismos existentes y crear una institución que esclareciera la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y proporcionara apoyo a las víctimas, los supervivientes y las familias (véase [A/76/890](#)).

D. Esfuerzos para proporcionar asistencia, proteger a los civiles y procurar la rendición de cuentas

Acción humanitaria

56. La acción humanitaria afrontó obstáculos superpuestos, en particular la violencia, las trabas burocráticas, las sanciones y las medidas antiterroristas, y la escasez y el encarecimiento de productos esenciales como alimentos, medicinas y combustible.

57. En 2022, 79 trabajadores humanitarios fueron asesinados, 43 resultaron heridos y 113 fueron secuestrados en 17 contextos de conflicto¹³. El 97 % de los afectados era personal de contratación nacional. En Burkina Faso, el personal humanitario fue objeto de intimidaciones, secuestros y detenciones, incluso bajo la sospecha de colaborar con grupos armados. En Nigeria se produjeron secuestros y asesinatos de personal humanitario y ataques a los suministros. La imposición de escoltas militares en determinadas rutas socavó la percepción de la independencia, neutralidad e imparcialidad de las organizaciones humanitarias. En el Yemen se asesinó, hirió, secuestró, amenazó, intimidó y detuvo a personal humanitario. Incluso después de la tregua, el acceso humanitario se vio obstaculizado en las zonas de primera línea donde continuaban los combates. En Etiopía hubo trabajadores humanitarios que murieron o resultaron heridos; otros fueron arrestados, hostigados o intimidados.

58. En la República Árabe Siria, Sudán del Sur, el Yemen y otras zonas de conflicto, las municiones explosivas obstaculizaron el acceso humanitario a las comunidades. En el oeste de la República Centroafricana, esas municiones impidieron ofrecer asistencia a al menos 30.000 personas.

59. En Ucrania, ningún convoy humanitario interinstitucional pudo cruzar la primera línea para llegar a las zonas bajo el control militar temporal de la Federación de Rusia. En algunas partes de Etiopía, la violencia limitó la capacidad para prestar asistencia. Después de interrupciones prolongadas a lo largo del año, en noviembre, tras la firma del acuerdo de cesación de las hostilidades, se reanudaron los convoyes de ayuda a Tigré a través de Afar y tres nuevos corredores desde Amara.

¹³ Humanitarian Outcome, “2022”, Base de Datos sobre la Seguridad de los Trabajadores Humanitarios; puede consultarse en <https://aidworkersecurity.org/>.

60. La información errónea y la desinformación que desacreditaban a los actores humanitarios incidieron en la percepción pública, minaron la confianza, crearon riesgos para la seguridad y mermaron la capacidad de los trabajadores humanitarios para ayudar a las personas necesitadas. En Etiopía, la politización e instrumentalización de la ayuda humanitaria y la desinformación sobre algunas organizaciones socavaron la confianza en su neutralidad, imparcialidad e independencia.

61. Los procedimientos burocráticos y administrativos retrasaron y obstaculizaron de manera considerable las operaciones humanitarias. En el Afganistán, la decisión de prohibir que las mujeres trabajaran para organizaciones no gubernamentales tuvo consecuencias inmediatas potencialmente mortales en todo el país al impedir que se evaluaran las necesidades de las mujeres y se les brindara asistencia y al menoscabar gravemente la calidad y la eficacia de la acción humanitaria. La posterior prohibición, en abril de 2023, de que las mujeres afganas trabajasen para las Naciones Unidas también tuvo graves repercusiones en las operaciones humanitarias de la Organización y puso vidas en peligro. Otras medidas, como los intentos de influir en la selección de beneficiarios y asociados en la ejecución y en la contratación de personal, la demanda de acceso a datos sensibles y las restricciones a la circulación, interfirieron en la acción humanitaria y la retrasaron. En algunas zonas del Yemen, la exigencia de que un familiar cercano varón acompañara a las trabajadoras humanitarias yemeníes condicionó las operaciones humanitarias, hizo que se retrasaran y suspendieran misiones y programas críticos y limitó el acceso a los más vulnerables, en especial a las mujeres y las niñas.

62. En Malí, Myanmar, el Sudán y otros lugares, las restricciones a la circulación y los puestos de control impidieron el acceso humanitario a las poblaciones afectadas. En el Camerún, los requisitos burocráticos para obtener autorizaciones por escrito y completar los trámites de expedición de visados y el hecho de que el Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas no aprobara autorizaciones de vuelo durante varios meses obstaculizaron las operaciones humanitarias. En Myanmar, los trabajadores humanitarios se toparon con trabas administrativas para obtener autorizaciones de viaje, mientras que las autoridades locales limitaron en gran medida o denegaron el acceso a determinadas zonas. En algunas partes de Etiopía, las medidas administrativas fueron uno de los factores por los que se detuvieron las operaciones humanitarias durante varios meses seguidos.

63. En la República Árabe Siria, la República Centroafricana y otros lugares, las interrupciones del suministro de combustible y la escasez de este obstaculizaron las operaciones humanitarias y obligaron a las organizaciones a reducir, retrasar o incluso cancelar visitas sobre el terreno, actividades de distribución y proyectos. La escasez de combustible, efectivo y otros suministros siguió complicando la movilización de la ayuda en Tigré y ciertas zonas de Afar y Amara. En Nigeria, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y otras zonas de conflicto, las actividades humanitarias tuvieron que hacer frente al encarecimiento de las medicinas, los alimentos y el combustible.

64. Pese a esos grandes obstáculos surgieron algunas buenas prácticas. En Colombia, la nueva legislación dejó atrás las limitaciones anteriores e hizo posible que organizaciones humanitarias imparciales mantuvieran contacto con fines exclusivamente humanitarios con grupos armados organizados. En marzo de 2022, Ucrania simplificó los procedimientos aduaneros para la importación de ayuda humanitaria, agilizó el proceso de autorización de importaciones mediante la aprobación previa de una lista de artículos reconocidos como ayuda humanitaria, aplazó el pago en aduana por alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad y aprobó un procedimiento para eximir temporalmente del reclutamiento a

los conductores que repartían ayuda humanitaria. En Mozambique, se modificó un decreto para facilitar la expedición de visados para el personal humanitario, y en el Camerún se establecieron mecanismos de coordinación entre las autoridades y el personal humanitario con vistas a resolver los problemas administrativos.

65. Las sanciones y las medidas antiterroristas siguieron dificultando las actividades humanitarias imparciales, entre otras cosas al impedir determinados pagos de tasas, compras de productos básicos o suministros de bienes. No obstante, se hicieron avances constantes frente a esos efectos no deseados. A ese respecto, cabe destacar la resolución [2664 \(2022\)](#) del Consejo de Seguridad, que exime de todas sus medidas de congelación de activos actuales y futuras el suministro, el procesamiento o el pago de fondos y otros activos financieros o recursos económicos y la provisión de bienes y servicios que sean necesarios para asegurar la entrega oportuna de asistencia humanitaria o apoyar la realización de otras actividades destinadas a atender las necesidades humanas básicas por parte de una amplia gama de organizaciones. Los Estados aplicaron medidas nacionales y regionales a fin de dar cabal cumplimiento a la resolución. Algunos Estados también aprobaron exenciones humanitarias similares en su propio marco de sanciones financieras.

Misiones de mantenimiento de la paz y misiones políticas especiales

66. Los mandatos de protección de los civiles en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se aplicaron en contextos cada vez más inestables, con una menor cooperación de los Gobiernos de los países anfitriones y la presencia de fuerzas extranjeras. En la República Centroafricana y Malí, las municiones explosivas pusieron en peligro a los civiles y obstaculizaron la movilidad del personal de mantenimiento de la paz. Las misiones de mantenimiento de la paz se han adaptado para hacer frente a las dificultades y proteger a los civiles con mayor eficacia. Las misiones están probando soluciones tecnológicas digitales con objeto de mejorar la conciencia situacional y fundamentar los sistemas de análisis táctico de misiones, alerta temprana y respuesta rápida a fin de anticiparse a la violencia contra los civiles, prevenirla y darle mejor respuesta. La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana adoptó un enfoque más sólido y móvil para responder a las alertas de amenazas de manera más proactiva y empezó a aplicar medidas de mitigación durante el cierre de bases temporales de operaciones. Las misiones también siguieron ayudando a los Estados anfitriones a cumplir su responsabilidad de proteger a los civiles. En ese sentido, dieron apoyo, en consonancia con sus mandatos, a la aplicación de la estrategia orientada políticamente para el centro de Malí, a los tribunales especializados de la República Centroafricana y la República Democrática del Congo, y a los dirigentes tradicionales de Sudán del Sur en materia de gestión de los conflictos locales. Las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas también mejoraron las iniciativas de mitigación encaminadas a prevenir y atender los posibles daños a civiles derivados de sus operaciones militares y policiales, basándose en su examen de 2022 y en la información aportada por expertos de las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, los ejércitos nacionales y la sociedad civil.

67. La información errónea y la desinformación sobre las Naciones Unidas pusieron en peligro la seguridad de su personal y mermaron la capacidad de las misiones para cumplir sus mandatos de protección de los civiles. En la República Democrática del Congo, ese tipo de discurso alentó protestas violentas contra la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo en julio de 2022, que se saldaron con la muerte de varios civiles y tres soldados de las fuerzas de mantenimiento de la paz y con el deterioro de la confianza pública. Las misiones de mantenimiento de la paz han empezado a concebir estrategias para hacer frente a la información errónea y la desinformación, por ejemplo respondiendo a

falsedades concretas, verificando los datos en publicaciones en los medios sociales y entablando contacto proactivamente con las comunidades, la sociedad civil y los periodistas para ayudar a crear capacidades frente a este problema.

68. Las misiones políticas especiales contribuyeron a la protección de los civiles colaborando en la prevención y solución de conflictos y promoviendo los derechos humanos y el estado de derecho. En el Sudán, la Misión Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas para la Transición en el Sudán (UNITAMS) y el equipo de las Naciones Unidas en el país siguieron apoyando al Gobierno en la aplicación del Plan Nacional para la Protección de los Civiles. El Comité del Alto el Fuego Permanente de Darfur, presidido por la UNITAMS, entró en pleno funcionamiento en 2022 con el objetivo de suavizar las tensiones, resolver las controversias y emprender actividades de creación de capacidad junto a las autoridades locales. La UNITAMS también proporcionó asistencia técnica para reforzar el Mecanismo Nacional para la Protección de los Civiles y los comités de protección de los civiles en los estados, así como para formar al personal desplegado con la Fuerza Conjunta de Mantenimiento de la Seguridad en Darfur. Sin embargo, el estallido de los enfrentamientos en el Sudán en abril de 2023 puede incidir de manera significativa en el trabajo en curso de la Misión. La UNITAMS reevaluará su planteamiento actual en función de cómo evolucione la situación.

Rendición de cuentas por delitos internacionales

69. Aunque el ritmo de las denuncias de violaciones graves del derecho internacional humanitario siguió superando al de su investigación y enjuiciamiento penal, se lograron avances importantes a la hora de exigir responsabilidades penales. En la República Centroafricana, el Tribunal Penal Especial emitió su primer fallo, en que condenó a tres antiguos miembros de un grupo armado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en 2019. En la República Democrática del Congo, un tribunal militar móvil condenó a nueve miembros de milicias por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluidos el asesinato, la tortura, la violación y el pillaje, cometidos en 2017. En Guatemala, cinco excombatientes paramilitares fueron condenados por violencia sexual cometida durante el conflicto a principios de la década de 1980. La Jurisdicción Especial para la Paz, creada en virtud del acuerdo de paz de Colombia de 2016, celebró su primera audiencia, en la que oficiales militares retirados y un civil admitieron haber orquestado el asesinato de 120 civiles entre 2007 y 2008.

70. Varios Estados ejercieron también una jurisdicción amplia o universal, contribuyendo a colmar las lagunas en materia de rendición de cuentas. En relación con el conflicto en la República Árabe Siria, un tribunal alemán condenó a un exoficial de inteligencia sirio por asesinato, violación y otros delitos. Por otra parte, un tribunal alemán condenó a un miembro del Dáesh por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y complicidad en genocidio contra la comunidad yazidí. En Francia, un excomandante liberiano de un grupo armado fue condenado por delitos graves, incluidas la tortura y la complicidad en crímenes de lesa humanidad, cometidos entre 1993 y 1994. En los Estados Unidos se aprobó la Ley para hacer Justicia a las Víctimas de Crímenes de Guerra, que posibilita el enjuiciamiento penal de crímenes de guerra cometidos en el extranjero con independencia de la nacionalidad del autor y de la víctima.

71. La Corte Penal Internacional encaró asimismo su período más activo. En abril de 2022, la Corte dio comienzo a su primer juicio en relación con la situación en Darfur, que fue también el primer juicio a raíz de una remisión del Consejo de Seguridad. Asimismo, se iniciaron o continuaron procedimientos contra personas acusadas de delitos internacionales en Malí y la República Centroafricana. En marzo,

la Fiscalía de la Corte anunció una investigación sobre la situación en Ucrania desde el 21 de noviembre de 2013, basada en las remisiones de los Estados partes.

III. Impacto de los conflictos en la disponibilidad de alimentos y agua

72. Desde que se aprobó la resolución [2417 \(2018\)](#), en la que el Consejo de Seguridad reiteró su compromiso de hacer frente a la inseguridad alimentaria originada por conflictos, han persistido los altos niveles de hambre provocada por los conflictos. En 2022, más de 250 millones de personas padecieron hambre aguda en 58 países y territorios, en muchos de los cuales había conflictos armados.

73. Los conflictos y la inseguridad fueron las causas más importantes de los elevados niveles de inseguridad alimentaria aguda para alrededor de 117 millones de personas en 19 países y territorios, entre ellos Etiopía, Nigeria, la República Árabe Siria, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Somalia, el Sudán, Sudán del Sur, el Yemen y la región central del Sahel. De conformidad con la resolución [2417 \(2018\)](#), se alertó al Consejo de Seguridad del riesgo de hambruna originada por conflictos e inseguridad alimentaria generalizada en partes de Etiopía, el nordeste de Nigeria, Sudán del Sur y el Yemen, donde se estimaba que un total de 648.000 personas se enfrentarían a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria.

74. En esos y muchos otros conflictos, las municiones explosivas dañaron, destruyeron o inutilizaron infraestructuras y bienes civiles esenciales para los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria y la supervivencia de la población. Los sistemas de producción agrícola, almacenamiento, transporte y distribución, incluidos los mercados, se vieron perturbados, lo que dio lugar a la escasez de alimentos y a subidas de precios. Se abandonaron cultivos y ganado, y los agricultores no pudieron vender sus productos. El desplazamiento de los agricultores exacerbó la inseguridad alimentaria, mientras que los desplazados tuvieron dificultades para acceder a los alimentos, entre otras cosas por la falta de oportunidades de subsistencia. En ocasiones se impidió deliberadamente que la población civil obtuviera alimentos y suministros de los que dependía. También se vio obstaculizado el acceso de las organizaciones humanitarias imparciales a las personas necesitadas, en particular como consecuencia de ataques contra trabajadores y bienes humanitarios. Esos patrones de conducta se observaron en varios conflictos.

75. Los conflictos también desencadenaron y agravaron la escasez de agua. La destrucción, los daños y la interrupción —a veces deliberada— de los servicios relacionados con el agua, combinados con los efectos del cambio climático y años de deterioro, dejaron a millones de personas sin agua potable y causaron contaminación, brotes de enfermedades infecciosas mortales y el riesgo de malnutrición.

76. Otros factores importantes agravaron el hambre. Dado que Ucrania y la Federación de Rusia figuran entre los principales proveedores mundiales de alimentos y que la Federación de Rusia es asimismo uno de los principales exportadores de fertilizantes, muchos países dependen de aquellos para cubrir sus necesidades, entre ellos Burkina Faso, Etiopía, la República Democrática del Congo, Somalia y el Yemen. Las interrupciones del comercio por el conflicto armado en Ucrania contribuyeron a que los precios de los alimentos y los fertilizantes alcanzaran máximos históricos, lo que agravó la inseguridad alimentaria en todo el mundo. El cambio climático, manifestado en sequías, lluvias intensas e inundaciones, también exacerbó el hambre en varios conflictos.

77. En Etiopía, Malí, el Níger, el Yemen y otros lugares, la inseguridad alimentaria expuso en mayor medida a los civiles a la violencia de género, la explotación y el

matrimonio infantil, precoz y forzado. En los centros de reasentamiento de Cabo Delgado (Mozambique), la escasez de agua aumentó la exposición de las mujeres y las niñas al riesgo de sufrir violencia sexual al tener que recorrer largas distancias a pie en la oscuridad para buscar agua. En Burkina Faso y Malí, la escasez de alimentos obligó a los niños a abandonar la escuela y a los progenitores a racionar la comida y recurrir a alimentos menos nutritivos. El hambre también causó y agravó problemas de salud como la anemia, los resultados desfavorables del embarazo, la depresión y la ansiedad.

Daños directos a las fuentes de agua y alimentos

78. En Ucrania, el sector agrícola sufrió destrozos y daños en maquinaria y equipos, almacenes, cabezas de ganado, recursos de pesca y acuicultura, y cultivos, así como el robo de insumos y productos. Una granja avícola fue alcanzada en un ataque, mientras que otra perdió casi 4 millones de pollos por sed e inanición. Las tierras agrícolas quedaron plagadas de minas terrestres, municiones en racimo y restos explosivos de guerra, con el consiguiente peligro de muerte o lesión para los agricultores, por lo que se suspendieron varias temporadas de siembra. Los daños en las infraestructuras de agua y saneamiento, incluidas las presas y los sistemas de depuración del agua y de aguas residuales, y el corte de los puntos de abastecimiento de agua dulce hicieron que se interrumpiera el suministro de agua potable y aumentara el riesgo de enfermedades.

79. En Menaka (Malí) se destruyeron cultivos y se robó ganado, lo que obligó a la población a abandonar sus tierras. En Somalia se quemaron vehículos comerciales que transportaban alimentos y ganado, maquinaria agrícola y cultivos, y la destrucción de la ribera del río Shabeelle provocó grandes inundaciones que asolaron zonas agrícolas. En las regiones etíopes de Amara, Tigré y Afar, los alimentos, los almacenes, las instalaciones de riego, los cultivos y las tierras agrícolas sufrieron graves daños o quedaron destruidos. En Gaza, a causa de las hostilidades quedaron dañadas decenas de zonas agrícolas, invernaderos y explotaciones ganaderas y avícolas, mientras que en las tierras de cultivo permanecían municiones explosivas de las hostilidades de 2021. En la Ribera Occidental se demolieron 343 instalaciones agrícolas, lo que trastornó los medios de subsistencia y exacerbó la inseguridad alimentaria.

80. En Sudán del Sur, se calcula que 16,1 km² quedaron contaminados por municiones explosivas, echándose a perder tierras agrícolas antes fértiles, principalmente en el sur de la región de Ecuatoria. En el Yemen, las minas terrestres en tierras de cultivo y zonas agrícolas trastornaron gravemente los medios de subsistencia basados en la producción agrícola. Se observaron patrones similares en otros países, como Burkina Faso, Malí, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y el Sudán.

81. También se interrumpió el suministro de agua. En Burkina Faso, 58 puntos de abastecimiento de agua sufrieron interrupciones en 2022, entre otras cosas por el corte de líneas eléctricas, la destrucción de generadores o paneles eléctricos, daños en bombas de agua y depósitos, y envenenamiento. Asimismo, al resultar dañadas las torres eléctricas, siete localidades se quedaron sin suministro de agua. Como consecuencia de esos actos, más de 830.000 personas se vieron privadas de agua potable. En el Yemen, el principal embalse del distrito de Sahar quedó gravemente dañado después de un ataque, lo que afectó al suministro de agua para unas 130.000 personas. La presencia de minas terrestres en los sistemas de abastecimiento de agua impidió que se regaran correctamente las tierras, con los consiguientes daños a largo plazo en la tierra laborable. En Idlib (República Árabe Siria) fue blanco de un ataque la estación de bombeo de agua de Arshani, que abastece a unas 200.000 personas. Se

calcula que dos tercios de las plantas de tratamiento de agua, la mitad de las estaciones de bombeo y un tercio de los tanques elevados del país han sufrido daños desde 2011.

Obstáculos a la producción y el suministro de alimentos y agua y el acceso a ellos

82. Diversos factores, como la violencia, las restricciones a la circulación y la escasez de electricidad y combustible, exacerbaron la escasez de alimentos y agua. En la República Democrática del Congo, la violencia perturbó la actividad agrícola y comercial, reduciendo la disponibilidad de suministros básicos y productos agrícolas y repercutiendo en los precios. En Malí se cercaron aldeas y se restringió la libertad de circulación, de manera que los civiles se quedaron sin acceso a los alimentos y a sus medios de subsistencia. En Somalia, el control de las partes sobre las zonas rurales y las principales rutas de abastecimiento restringió gravemente la circulación de personas y bienes comerciales y la entrega de ayuda humanitaria, de modo que se encarecieron los productos básicos. En Burkina Faso, el control de las partes sobre las carreteras principales ralentizó considerablemente el suministro de alimentos básicos para los hogares, como el mijo, el aceite, el azúcar y el sorgo. En Colombia, un confinamiento de hasta tres meses impidió que las comunidades atendieran sus cultivos y comerciaran con los municipios vecinos, mientras que los toques de queda y otras restricciones impidieron la pesca nocturna. En Etiopía, la falta de efectivo, combustible y bienes comerciales en Tigré y partes de Afar y Amara limitó la producción y disponibilidad de alimentos. No obstante, los servicios comenzaron a reanudarse a finales de 2022.

83. En una encuesta del Observatorio de Desplazamiento Interno se constató que los desplazados tenían más dificultades para acceder a los alimentos. En el Camerún, el 87 % de los encuestados desplazados por el conflicto y la violencia declararon tener dificultades, frente a alrededor del 20 % de los encuestados no desplazados de las mismas zonas. En Malí, el 61 % de los desplazados internos declararon tener dificultades para acceder a los alimentos, el triple que antes de su desplazamiento; la cifra era notablemente más alta que entre las personas no desplazadas. Los desplazamientos repetidos empeoraban aún más las cosas: el 85 % de los encuestados que se habían visto desplazados dos veces declararon tener dificultades para acceder a los alimentos, frente al 57 % de los que se habían tenido que desplazar una vez¹⁴.

84. En la República Árabe Siria, las estaciones de bombeo de agua se vieron gravemente perjudicadas por los cortes de electricidad y la falta de combustible. Además, la sequía hizo que se redujera el caudal del río Éufrates, lo que impidió generar energía en las presas hidroeléctricas y agravó aún más la escasez de agua. La planta de abastecimiento de Aluk, principal fuente de agua para más de 460.000 personas en el noreste del país, dejó de funcionar varias veces, en ocasiones durante meses. También se vieron afectadas unas 500.000 personas que necesitaban agua para la actividad agrícola, la producción de alimentos y otros medios de subsistencia. La calidad deficiente del agua provocó miles de presuntos casos de cólera en todo el país. En conjunto, la disponibilidad de agua potable en la República Árabe Siria se redujo un 40 % desde el comienzo del conflicto.

85. Los conflictos armados, a menudo en combinación con otros factores, también impulsaron el alza de los precios de los alimentos y redujeron el acceso a los suministros necesarios para su preparación y distribución, en particular el agua y el combustible. El conflicto armado en Ucrania contribuyó a que se dispararan los precios de los combustibles, los fertilizantes y los alimentos y perturbó la cadena de suministro en todo el mundo. Sus efectos se sintieron en otras situaciones de conflicto,

¹⁴ Observatorio de Desplazamiento Interno, *Informe mundial sobre desplazamiento interno 2023* (Ginebra, 2023).

por ejemplo en el Camerún, Colombia, Etiopía, Myanmar, Nigeria, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Somalia y el Yemen.

86. En el Territorio Palestino Ocupado, a causa del conflicto prolongado, el estancamiento económico, las restricciones al comercio y al acceso a los recursos, las elevadas tasas de desempleo y pobreza y las interrupciones en la cadena mundial de suministro, los civiles, sobre todo en Gaza, no pudieron permitirse adquirir alimentos saludables. En la República Árabe Siria, el precio de los alimentos, el agua, el combustible y la electricidad llegó a ser inalcanzable para muchos, situación que se vio agravada por la crisis del combustible, la inflación y los fenómenos meteorológicos. Los agricultores dispusieron de menos dinero para sembrar y gastaron más en regar los cultivos y transportar las cosechas a los mercados. En muchos países en conflicto, como Myanmar, la inflación, la devaluación de la moneda y las perturbaciones de los mercados internacionales exacerbaron la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria.

87. En julio de 2022, en plena espiral de los precios de los alimentos y aumento de la inseguridad alimentaria en todo el mundo, la firma de la Iniciativa sobre el Transporte Seguro de Cereales y Productos Alimenticios desde los Puertos Ucranianos (Iniciativa del Mar Negro) y el memorando de entendimiento sobre la promoción de los productos alimenticios y los fertilizantes rusos en los mercados mundiales representó un rayo de esperanza. En conjunto, ambas iniciativas han contribuido de manera considerable a la seguridad alimentaria mundial. Disminuyeron los precios de los alimentos básicos y la volatilidad de los precios, y se estabilizaron los mercados. Gracias a la Iniciativa fue posible exportar de forma segura más de 15 millones de toneladas de alimentos en 2022, incluidas 380.000 toneladas de trigo transportadas por el Programa Mundial de Alimentos en apoyo de operaciones humanitarias en el Afganistán, Etiopía, Somalia y el Yemen. Aunque los precios mundiales de los alimentos bajaron después de marzo de 2022, a finales de ese año seguían estando un 45 % por encima del promedio de los 20 años anteriores, y los precios de los fertilizantes excedían en más de un 200 % los de 2019. Aplicar plenamente la Iniciativa del Mar Negro y el memorando de entendimiento permitiría seguir contribuyendo a la seguridad alimentaria mundial.

88. Los fenómenos meteorológicos extremos, tanto sequías como lluvias intensas, agravaron la inseguridad alimentaria en muchos conflictos, por ejemplo en Colombia, Somalia y la región central del Sahel. En la República Árabe Siria, la peor sequía en 70 años fue culpable en gran medida de la merma de las cosechas. En el Yemen, las sequías e inundaciones, cada vez más frecuentes, combinadas con los daños a las infraestructuras y el medio ambiente y el deterioro de la economía, agravaron la escasez de alimentos y agua¹⁵. En Mozambique, la irregularidad e insuficiencia de las precipitaciones, sumadas a temperaturas inusualmente altas, dificultaron la producción agrícola.

89. Hay que hacer mucho más para prevenir y combatir el hambre en los conflictos armados. En noviembre de 2022, el Secretario General anunció el nombramiento de la Coordinadora de las Naciones Unidas para la Prevención y la Respuesta frente a las Hambrunas, encargada de dirigir y organizar una respuesta cohesionada de todo el sistema al aumento de la inseguridad alimentaria, así como a la sequía y la hambruna, en el Cuerno de África y otros lugares.

¹⁵ Centre for Civilians in Conflict, “Risking the future: climate change, environmental destruction, and conflict in Yemen”, octubre de 2022.

IV. Recomendaciones

90. En todos los temas examinados en el presente informe, la protección de los civiles depende de que se cumplan las normas aplicables del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y se adopten políticas y prácticas que refuercen tal protección. Los Estados y los grupos armados no estatales, según corresponda, deberían:

a) Ratificar los tratados pertinentes o adherirse a ellos e incorporar las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en las leyes nacionales, los manuales militares, los códigos de conducta, las reglas de enfrentamiento y la formación;

b) Examinar las políticas y prácticas relativas a la mitigación de los daños a civiles y revisarlas, si procede, y sumarse sin demora a la Declaración Política acerca del Fortalecimiento de la Protección de la Población Civil contra las Consecuencias Humanitarias Derivadas del Uso de Armas Explosivas en Zonas Pobladas y plasmar sus compromisos en medidas significativas;

c) Redoblar los esfuerzos para avanzar en la búsqueda de soluciones para los desplazados internos, en particular mediante estrategias para formular soluciones dirigidas por los Gobiernos que se sustenten en los planes y estrategias nacionales de desarrollo de estos y en los marcos de cooperación para el desarrollo de sus asociados para el desarrollo;

d) Establecer marcos jurídicos, de políticas e institucionales en que se responda de las personas protegidas bajo custodia y se garantice la eficacia en la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas y la correcta gestión de las personas fallecidas;

e) Proteger las operaciones humanitarias de la dinámica política del conflicto, respaldar la interacción humanitaria con todas las partes en el conflicto, incluidos los grupos armados no estatales, y tomar medidas para facilitar actividades humanitarias imparciales;

f) Excluir las actividades humanitarias y médicas imparciales del ámbito de aplicación de las sanciones y otras medidas contra el terrorismo y aplicar plenamente la resolución [2664 \(2022\)](#) del Consejo de Seguridad;

g) Dar cabal cumplimiento a las resoluciones [2417 \(2018\)](#) y [2573 \(2021\)](#), entre otras cosas protegiendo los bienes que son indispensables para la supervivencia de la población civil, manteniendo un celo permanente por proteger a los civiles y los bienes de carácter civil, y facilitando el acceso rápido y sin trabas de un socorro humanitario imparcial a todas las personas necesitadas;

h) Con el fin de romper el círculo vicioso entre conflicto armado e inseguridad alimentaria, encontrar soluciones políticas a los conflictos, respaldar las economías de los países vulnerables y salvaguardar los medios de subsistencia, aumentar el apoyo a las operaciones humanitarias y promover respuestas integradas para hacer frente a los múltiples factores que impulsan la inseguridad alimentaria aguda en los conflictos armados;

i) Garantizar el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, en particular mediante el diálogo político, la formación y la difusión, la planificación operacional conjunta y el condicionamiento de las exportaciones de armas al cumplimiento del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos;

j) Investigar presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio, enjuiciar a los autores, hacer que se repare a las víctimas y establecer garantías para que no se repitan esos crímenes, reforzar la capacidad y los recursos de los Estados para investigar y enjuiciar a los autores y, según proceda, hacerse parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y cooperar plenamente con la Corte y otros mecanismos judiciales y de investigación.

V. Conclusión

91. La situación sobre el terreno volvió a poner de manifiesto que, en todos los conflictos armados, existe una necesidad imperiosa de reforzar la protección de los civiles y, a tal efecto, reforzar el cumplimiento del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. El marco jurídico internacional que rige la conducta en los conflictos armados se ha ido perfeccionando a lo largo de más de 150 años. Los instrumentos y estrategias para la aplicación de esos marcos están bien establecidos y deben ponerse en marcha sin demora, para lo cual hace falta mucha más voluntad política de todas las partes en los conflictos armados y de todos los Estados y otros interesados pertinentes, que no deben escatimar esfuerzos a la hora de ejercer su influencia y tomar medidas concretas para mejorar el cumplimiento y reducir el sufrimiento humano en los conflictos armados.
